

Efectos del cierre de la Universidad del Mar

Las autoridades parecen haber optado por una solución drástica para dar una señal de estrictez, pero asumiendo costos que pueden resultar peligrosos.

ACOGIENDO LA solicitud del gobierno, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decidió el miércoles el cierre de la Universidad del Mar, entidad cuyos directivos se han visto envueltos en una serie de escandalosas irregularidades conocidas en los últimos meses. Todo indica que -junto con la gravedad de los antecedentes analizados- jugó un rol importante en la determinación la voluntad de emitir una señal política ante la indignación que ha despertado el caso en la ciudadanía. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que el Presidente del CNED señalara que con la medida se busca ayudar "a restablecer la fe pública del sistema universitario".

Las acusaciones contra los directivos de la Universidad del Mar son muy serias y las eventuales sanciones a los que se podrían ver sometidos deben ser resueltas por los tribunales. El CNED identificó además una serie de anomalías administrativas al interior de la entidad que deben ser investigadas. Sin embargo, aunque se trata de problemas graves, no es la primera vez que una universidad sufre inconvenientes que pongan en duda su viabilidad. En el pasado, procesos similares fueron resueltos por medio de la absorción de los planteles por parte de otros más solventes. Ahora también hubiera sido posible darse un tiempo bajo una autoridad interventora para buscar una salida menos traumática, pero al parecer ha primado la intención de generar un efecto. Sin duda que esto puede ser rentable en el corto plazo, pero, asimismo, generar consecuencias indeseadas más adelante, en especial si los reclamos de los afectados no son resueltos pronto y satisfactoriamente.

La revocación del reconocimiento oficial de la personalidad jurídica del plantel ha puesto en una delicada posición a los cuatro mil funcionarios del mismo y a los 12.500 alumnos que quedaban en él, quienes tienen escaso tiempo para buscar una alternativa antes de marzo. Representantes de estos últimos han realizado protestas y han recibido la solidaridad de federaciones estudiantiles, las cuales anuncian la realización de manifestaciones. De esta forma, se configura una situación en extremo riesgosa para el gobierno. Este, en su afán de mostrarse estricto, puede terminar provocando perjuicios mayores y asumiendo costos relevantes. La consideración de éstos hacía recomendable evaluar la búsqueda de soluciones menos extremas que la finalmente adoptada.

Resulta clave que a la hora de enfrentar los escándalos que han sacudido en el último tiempo al sistema de educación superior se evite tomar decisiones al calor del momento y, todo lo contrario, se extraigan lecciones adecuadas de episodios ingratos que ofrecen la oportunidad de realizar correcciones que vayan en beneficio de los alumnos y la institucionalidad. En el caso de la Universidad del Mar y de otros que se investigan, parece muy probable la comisión de irregularidades por parte de los propietarios y directivos, pero también es claro que muchas de éstas no se hubieran producido sin fallas evidentes de parte de los entes encargados de fiscalizar. Esta realidad debe llevar a preguntarse si la vía escogida para la fiscalización -la creación de regulaciones cada vez más astringentes- es la adecuada, y si no sería preferible perfeccionar y robustecer los mecanismos de información para que sean los postulantes y sus familias quienes decidan de manera libre e ilustrada por qué institución optar.